



Consejo de  
Transparencia y  
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

## RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0161/2017

FECHA: 27 de noviembre de 2017

**ASUNTO:** Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0161/2017 presentada por [REDACTED], en nombre y representación de la Plataforma en Defensa del Hospital Provincial de San Sebastián, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

### I. ANTECEDENTES

1. Los hechos que han dado lugar a esta Reclamación tienen su origen en un escrito registrado el 21 de diciembre de 2016 en la Junta de Extremadura en el que el ahora reclamante, al amparo del artículo 3.1 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y 8 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, presenta una denuncia ante la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura con relación a unas obras realizadas por la Diputación Provincial en el Hospital Provincial de San Sebastián de Badajoz. En dicha denuncia se exponía que el pasado 16 de diciembre de 2016 los miembros de la Plataforma habían sido advertidos de la realización de unas obras en el citado edificio, motivo por el que habían visitado las mismas observando que una máquina perforadora estaba abriendo un agujero en la solera interior de la planta baja del edificio en la primera crujía de una esquina de aproximadamente 2,30m por 2,00m. Puestos en contacto con el Jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Badajoz les había indicado que no existía licencia de obras para la actuación que se estaba llevando a cabo en dicho edificio, de manera que, al entender que "para esta actuación para la cual consideramos que es preceptivo la asistencia de un

[ctbg@consejodetransparencia.es](mailto:ctbg@consejodetransparencia.es)



arqueólogo que no había”, solicitan de la Dirección General que “intervenga al ser competencia de ella”, concluyendo su denuncia señalando que “esperamos nos sea comunicado, por escrito, el informe derivado de tales actuaciones y confeccionado por ustedes, lo más antes posible [sic].”

Mediante escrito de 13 de enero de 2017 del Director General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura se traslada al ahora reclamante que “las intervenciones que se estaban llevando a cabo consistían en un estudio geotécnico que actualmente se encuentra paralizado y a la espera de la aprobación del preceptivo proyecto de prospección arqueológica para valorar la presencia o ausencia de restos arqueológicos, así como la posible incidencia de las actuaciones llevadas a cabo”.

Posteriormente, a través de un escrito registrado el 25 de enero de 2017 en la Junta de Extremadura, el ahora reclamante remite al Director General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural la siguiente solicitud de información con relación a las tres calicatas realizadas por la Diputación Provincial de Badajoz en el interior del edificio del Hospital Provincial:

*Informe del arqueólogo de Patrimonio de la Junta sobre los resultados producidos por tal acción en el patrimonio del citado edificio.*

*Como ha sido preceptivo el citado informe exigido por el arquitecto Jefe de Disciplina Urbanística del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, como denunciante de tal actividad pido nos sea enviado el informe de incidencia de las citadas acciones y el proyecto de prospección arqueológica que, a tales efectos, ha realizado el arqueólogo enviado por su Dirección General para evaluar las obras realizadas en las tres calicatas llevadas a cabo durante el mes de diciembre de 2016.*

A este escrito del ahora reclamante se da contestación mediante oficio de 8 de febrero de 2017 del precitado Director General en el que se reitera el contenido de la anterior contestación de 13 de enero de 2017, en el que se ponía de manifiesto que las intervenciones que se estaban llevando a cabo en el edificio de referencia consistían “en un estudio geotécnico que actualmente se encuentra paralizado y a la espera de la aprobación del preceptivo proyecto de prospección arqueológica para valorar la presencia o ausencia de restos arqueológicos, así como la posible incidencia de las actuaciones llevadas a cabo”.

El ahora reclamante, en contestación al escrito de 13 de febrero de 2017 acabado de aludir en el párrafo anterior, remite el 9 de marzo de 2017 un nuevo escrito al Director General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural en el que, por una parte, le reitera la solicitud de copia del informe del arqueólogo de la Junta sobre *los resultados producidos en los posibles daños patrimoniales por tal acción en el patrimonio* del citado edificio y, por otra parte, solicita *copia de proyecto de prospección arqueológica que debe ser aprobado por la secretaría*



*de cultura y promovido por la diputación, sin el cual no se puede continuar con las obras que la misma institución está realizando en el edificio y al cual obliga el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Badajoz.*

A través de un oficio de 4 de mayo de 2017 del Director General de referencia se traslada al ahora reclamante que “una vez analizada la documentación remitida consistente en proyecto de Prospección y sondeos puntuales del edificio del antiguo Hospital de San Sebastián para ejecución de estudio geotécnico y cimentación de su rehabilitación a cargo de la arqueóloga [REDACTED], se ha considerado que el planteamiento original de realizar tres sondeos como insuficientes para obtener una información más completa de las posibles afecciones que la futura rehabilitación del edificio pudiera ocasionar, indicando la necesidad de aportar nueva documentación que planteara, al menos, varios sondeos que cubran estratégicamente la planta del edificio (patios, claustro, nace de las Descalzas...), estando a la espera de la fecha de hoy de la aportación de la citada documentación reformada.

Finalmente, mediante escrito registrado el 23 de mayo de 2017 en esta Institución, el interesado interpone una reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG solicitando de este Consejo para que “podamos tener respuesta de la denuncia y de los informes y proyecto arqueológico”.

2. Por escrito de 24 de mayo de 2017, a través de la Oficina de Reclamaciones Territoriales de este Consejo, se trasladó el expediente al Secretario General de Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, por el órgano competente para ello, se formularan las alegaciones que estimasen por conveniente, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizar.

A través de un oficio del Director General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural registrado en esta Institución el 19 de junio de 2017, se traslada a este Consejo informe y copia de los escritos remitidos por el ahora reclamante el 21 de diciembre de 2016, el 25 de enero y el 9 de mayo de 2017 así como de las contestaciones a los mismos el 13 de enero, el 8 de febrero y el 4 de mayo de 2017. En el informe de alegaciones, tras recordar el contenido de las solicitudes y las contestaciones elaboradas por la administración autonómica, se concluye que “se puede constatar que las solicitudes recibidas han sido contestadas en base a la documentación obrante en su momento en esta DGBMPC”.



## II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

*“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).*

*2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.*

En desarrollo de las anteriores previsiones de la LTAIBG el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Junta de Extremadura (Consejería de Hacienda y Administración Pública) han suscrito un Convenio para el traslado a este Consejo del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el precitado artículo 24 de la LTAIBG en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella administración autonómica y por las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. La primera cuestión en la que debemos centrar nuestra atención consiste en precisar la resolución expresa o presunta de la administración autonómica frente a la que se interpone la presente Reclamación. Para ello hemos de partir de una premisa elemental como es la definición de “información pública” a los efectos de la LTAIBG. Recordemos a estos efectos que según el artículo 13 de la Ley de



Transparencia se considera como tal «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título [el I] y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones».

Parece evidente, como se ha venido reiterando por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en anteriores Resoluciones, que el objeto del derecho ha de existir en el momento en que se formula la concreta solicitud de acceso a la información. Esto es, el ejercicio del derecho debe recaer necesariamente sobre información existente en el momento en que se solicita. Por ello, no es información pública a los efectos de la LTAIBG aquella que deba generarse en el futuro por la sencilla razón de que no existe en la fecha en la que se formula la correspondiente solicitud. En este caso concreto se encuentra la solicitud planteada el 21 de diciembre de 2016 en la que el ahora recurrente, tras denunciar una situación que entiende contraria al ordenamiento jurídico en materia de protección del patrimonio, solicita a la administración autonómica que se le comunique por escrito el informe derivado de las actuaciones inspectoras que corresponda. Esta petición no es manifestación del ejercicio del derecho de acceso a la información por la sencilla razón de que ese “informe” no existe en el momento en que se plantea solicitud. Motivo por el que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha de inadmitir la reclamación en este punto específico.

En iguales términos, y por idéntica motivación, debemos pronunciarnos con relación a las solicitudes de 25 de enero y de 9 de marzo de 2017, dado que de la contestación que la propia administración autonómica remite al ahora reclamante se deduce con nitidez que no existe el proyecto de prospección arqueológica solicitado en la fecha en que se plantean las solicitudes -señala expresamente en su contestación de 8 de febrero de 2017 que la intervención está paralizada “a la espera de la aprobación del preceptivo proyecto de prospección arqueológica”-. De modo que, también en este caso concreto ha de inadmitirse la reclamación en este punto específico.

Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que de la contestación formulada por la administración autonómica el 4 de mayo de 2017 a la solicitud del ahora reclamante de 9 de marzo de 2017 se deriva que en la fecha en que se contesta a la citada solicitud -más de dos meses después de haberse formalizado- existe un Proyecto de Prospección y sondeos puntuales del edificio en virtud del cual se ha considerado por aquella que “el planteamiento original de realizar tres sondeos como insuficientes para obtener una información más completa de las posibles afecciones que la futura rehabilitación del edificios pudiera ocasionar [...]”. De este modo a partir del 4 de mayo existe la certeza de que la información que antes no existía ahora sí que se ha incorporado al expediente, motivo por el que desde ese momento queda abierta la vía para que el interesado, en el ejercicio del derecho de acceso a la información formule una solicitud de acceso con relación a la misma, que habrá de ser tramitada por la administración autonómica.



### III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **DESESTIMAR** la Reclamación formulada por [REDACTED] por cuanto el objeto de la pretensión no existe en el momento de formularse las correspondientes solicitudes, no configurándose como información pública a los efectos del artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

EL PRESIDENTE DEL  
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO  
P. V (ARTÍCULO 10 DEL REAL DECRETO 919/2014)

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE  
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Francisco Javier Amorós Dorda

